

Violencia e inseguridad en México

Andrés Gómez de la Torre

Los espacios territoriales son, sin duda, factores condicionantes de los tomadores de decisión. Es el caso de México, de quien alguna vez algún político y mandatario remarcó que el país estaba muy lejos de Dios pero muy cerca de Estados Unidos. Y es que, en efecto, México posee una frontera norte colindante con la principal potencia mundial y al sur, unos límites con débiles Estados centroamericanos. Quizás por ello, México moldeó sus Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia con miras a la escena doméstica interna, percibiendo amenazas y riesgos que se incubaban sólo dentro del territorio nacional.

A partir de los años ochenta el narcotráfico, el crimen organizado y el fenómeno insurgente comenzaron a hacer realidad ese destino, dándose el lujo de colocar contra las cuerdas al Estado-nación mexicano.

El colapso del régimen político de un revolucionario partido único, el PRI, en el año 2000, produjo una “transición” que hizo posible llegar al poder al PAN (Partido Acción Nacional) y los sucesivos gobiernos de los Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. En ambos casos se tomaron decisiones para una reingeniería del sector seguridad nacional, cuyos pilares descansaban en la Secretaría de Gobierno (SEGOB) o Ministerio del Interior, la Secretaría de Defensa (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y el CISEN, el servicio de inteligencia creado en 1947 por un gobierno democrático, muchas veces calificado como “la CIA mexicana” por sus orígenes incubados en la guerra fría, y por su fuerte nexo y dependencia con su contraparte norteamericana.

Al analizarse la experiencia del Plan Colombia —ejecutado con apoyo de los Estados Unidos desde fines de la década de los noventa del siglo XX— el gobierno del Presidente Felipe Calderón —cuya prioridad política sería su declarada “guerra al narco”— negocia con los Estados Unidos la “Iniciativa Mérida” (2008), vista por muchos como una suerte de Plan Colombia II latinoamericano, “de segunda generación”, o desde otro ángulo, la respuesta de la potencia mundial dominante frente a una amurallada pero porosa frontera bilateral con México, plagada de inmigración ilegal, trata de personas, comercio ilegal de drogas, contrabando de armas y creciente actividad de los denominados “cárteles mexicanos” (Sinaloa, Juárez, Tijuana, Golfo, Zetas, familia Michoacana).

En el año 2005 fue promulgada la Ley de Seguridad Nacional, que intentaría asegurar y precisar con más claridad las funciones y especialmente la coordinación inter-agencial entre los entes estatales encargados de brindar seguridad en México, formalizándose el Consejo de Seguridad Nacional y una Secretaría Técnica, paso ciertamente importante, pero insuficiente para enfrentar la dimensión de los múltiples problemas de la seguridad nacional y pública en el país.

Así, la violencia no cesó y más bien, se acentuó. México entonces comienza a tener ciertas “áreas sin ley” (Ciudad Juárez, Michoacán); la corrupción estatal y la penetración de los cuerpos de seguridad oficiales se convierten en otro fenómeno

gravísimo, que impide una acción eficaz y firme contra la violencia perpetrada por el denominado “narco”. Paralelamente nuevas formas de violencia interna, y respuestas frente a la inseguridad, aparecen a modo de *outsourcing* de la seguridad, nos referimos al paramilitarismo, que se mueve entre los grupos que ejercen el uso o monopolio de la fuerza. En el denominado “Operativo Conjunto de Michoacán” (2006) —uno de los más voceados de la historia de las ofensivas estatales mexicanas para recuperar el principio de autoridad— se pudo observar la existencia de múltiples actores en ejercicio de la violencia: autodefensas clásicas, cuerpos de seguridad estatal (SEDENA, SEMAR, PGR, CISEN), cárteles (Caballeros Templarios & Guardia Michoacana), autodefensas comunitarias (el nuevo tipo de policías populares o rurales), y unas inoperantes policías municipales, entre otros.

Muchos formadores de opinión afirman que el retorno del PRI al poder, con el Presidente Peña Nieto —luego del paréntesis panista— no supondría mayores cambios respecto de las políticas de seguridad trazadas por su antecesor, especialmente, en lo que a las relaciones con Estados Unidos en el rubro de la seguridad se refiere.

Lo cierto es que si bien han existido victorias puntuales, como la más reciente captura del mafioso capo “chapo” Guzmán (2014), o la transitoria asesoría de exitosos expertos como el ex jefe policial colombiano, general Oscar Naranjo (2012-2014), a lo que se suma el “Pacto por México”, no se ve aún una ruta clara del nuevo gobierno sobre cómo enfrentar las amenazas internas, lo que puede ahondar peligrosamente los riesgos y alejar las posibilidades de alcanzar mejores niveles de seguridad en ese país.

Citado:

Gómez de la Torre, A. (2014, mayo-junio). Violencia e inseguridad en México. *Boletín virtual Panorama Mundial*. Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://idei.pucp.edu.pe/panorama-mundial/>